

Dolor y violencia

El asesinato de un niño de 14 años en Los Ángeles es un recordatorio brutal de la espiral de violencia que ha tomado control de amplios sectores de nuestra sociedad. No se trata solo de una cifra más en la estadística criminal; es la vida truncada de un adolescente, el duelo de una familia y el reflejo de un problema que se agrava con el paso del tiempo. La inseguridad y el uso de armas de fuego no son fenómenos aislados, sino que son una amenaza permanente en barrios donde niños y adolescentes deberían poder caminar sin temor.

En datos de 2021, solo en la Región Metropolitana se contaron 174 zonas catalogadas como de "alto riesgo" por prestadores de servicios esenciales (agua, luz, correos, ambulancias y delivery), muchas de las cuales estaban lejos de farmacias, consultorios, comisarías y supermercados. Más de un millón de personas solo en la capital.

El informe de la Fiscalía Nacional revela datos estremecedores: 66 menores de edad fueron asesinados en 2023, un aumento del 46,6% en solo siete años. Las cifras hablan por sí solas, pero la realidad es aún más dura. Un 79% de las víctimas eran varones y el 68% tenía entre 14 y 17 años, la misma edad del joven asesinado en Los Ángeles. ¿Cuántos nombres más se sumarán a esta lista antes de que la sociedad reaccione con la urgencia que esto merece?

Los homicidios de menores ya no son incidentes aislados. La violencia armada está cada vez más presente en entornos urbanos y en comunidades donde el crimen organizado ha infiltrado la cotidianidad. Es alarmante que un niño de 14 años reciba un disparo en plena vía pública y que su propia madre, en un gesto que resulta desconcertante, no quiera presentar denuncia. Este acto de silencio puede explicarse desde el miedo o la resignación, pero jamás puede ser

normalizado.

Las autoridades han condenado el hecho y han prometido encontrar a los responsables. Sin embargo, la justicia penal solo es una parte de la solución. Se requiere un enfoque integral que incluya medidas preventivas, control del tráfico de armas y programas sociales que alejen a los niños y adolescentes de entornos violentos. El acceso a armas de fuego, cada vez más fácil y generalizado, está cobrando vidas de manera indiscriminada y sin distinción de edad.

El dato de que el 38,5% de los homicidios de niños ocurra en contextos delictivos no es menor. Habla de un problema estructural, de menores creciendo en ambientes hostiles donde la violencia se convierte en una posibilidad cotidiana. Si la cifra de homicidios en Chile ha disminuido un 6% en los últimos años, pero la de niños asesinados ha crecido, estamos frente a una tragedia que no puede seguir siendo invisible.

Este crimen es también un llamado de atención sobre la falta de protección hacia los menores. Se requiere con urgencia políticas públicas eficaces, con prevención del delito desde la primera infancia y un control más estricto sobre las armas de fuego. La subsecretaría de la Niñez ha advertido que casi el 40% de los homicidios de menores son cometidos por personas conocidas. Esto significa que el peligro no solo está en la calle, sino también en los círculos cercanos de los niños y adolescentes.

El caso de Los Ángeles debe ser un punto de inflexión en la discusión sobre el uso de armas de fuego y la violencia que afecta a la infancia. La indignación no basta si no va acompañada de acciones concretas. No podemos permitir que los niños sigan pagando con su vida las falencias de un sistema que, hasta ahora, no ha sabido protegerlos.